

A un cuarto de siglo del golpe militar,
Crisis, violencia y revolución

Eugenio Tirón
6 páginas

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 no tomó por sorpresa a nadie. Cual más cual menos, todos sabían que un quiebre (en el sentido que fuese) era ya inevitable. Sin embargo, después de tantos años de normalidad democrática, muy pocos chilenos lograban representarse la forma que tomaría y las consecuencias que podría tener una ruptura institucional. Y tampoco que esa ruptura iría tanto más allá de las instituciones, hasta calar en lo más hondo de las vidas individuales. El autor de este artículo es sociólogo.

La violencia que desplegaron las Fuerzas Armadas esa mañana de 1973 y en los días inmediatamente posteriores superó todo lo imaginado. Cabe recordar que ellas bombardearon el Palacio de Gobierno, con el presidente Allende y sus colaboradores adentro; que la dirigencia política del gobierno fue encarcelada y mantenida entre dos y tres años en campos de concentración; que en todo el país fueron perseguidos y apresados los dirigentes de partidos, de sindicatos o de agrupaciones poblacionales comprometidos con el Gobierno caído, miles de los cuales fueron torturados, muertos, o permanecen como "desaparecidos". Que decenas de miles de militantes de partidos de izquierda tuvieron que buscar asilo en embajadas extranjeras; que en muchas partes bastaba ser considerado simpatizante del gobierno caído para ser despedido del trabajo; que se quemaron libros en las calles y se estigmatizó todo lo que hubiera tenido que ver con el gobierno precedente, sembrando el terror en el amplio grupo de chilenos identificados con la Unidad Popular. Y todo esto en circunstancias en que la resistencia armada al golpe militar fue casi nula y la Junta Militar declaraba que su propósito era sólo "restablecer la institucionalidad quebrantada".

¿Por qué ese nivel tan abrumador de violencia física y simbólica? ¿Por qué el respaldo o aceptación de esta violencia por una significativa parte de la población? De partida el empleo de una violencia desproporcionada buscó inhibir cualquier disensión interna en las FF.AA. Con el golpe, las FF.AA. rompían con una larga tradición de prescindencia en los asuntos políticos. Tiene que haber influido también el "sordo rencor" -como lo llamara el general Carlos Prats- de los militares hacia los políticos, a quienes sentían responsables de haberlos segregado de las más altas posiciones sociales y de haber contraído los recursos destinados a su corporación. La violencia del golpe reveló además la intensidad que había alcanzado la demanda autoritaria en aquellos sectores de la sociedad que percibieron al gobierno de la Unidad Popular como una amenaza vital, y cuyo miedo se había ido transformando en una furia que se reveló incontenible e inmisericorde.

La Unidad Popular

La ascensión al gobierno en 1970 de la Unidad Popular (UP) debe ser interpretada como un reflejo -antes que una causa- del agotamiento del modelo de desarrollo y del escenario político prevaleciente a comienzos de la década del setenta. En las elecciones de aquel año el electorado se repartió aproximadamente en los tres tercios tradicionales, con una muy leve mayoría de Salvador Allende sobre su seguidor, el candidato derechista Jorge Alessandri. Los esfuerzos por llegar a una alianza de gobierno entre la UP y el PDC fracasaron repetidas veces -tanto durante el lapso que precedió la ratificación de Allende por el Congreso, como entre 1970 y el golpe militar-, en una verificación del punto muerto al que había llegado el sistema político, ya incapaz de producir consensos y organizar alianzas. El de la UP fue un gobierno minoritario, no obstante lo cual insistió en proponerse una transformación revolucionaria de la sociedad chilena con un fuerte contenido utópico.

En términos simples, el proyecto de la Unidad Popular apuntaba a exacerbar simultáneamente las tres tendencias características del consenso político-económico que imperó en Chile en la mitad del siglo: industrialización vía protección del mercado interno, integración social acelerada y ampliación de la democracia política. Ese tratamiento de shock no tomaba en cuenta, sin embargo, ni la descomposición de las tendencias históricas ni los efectos laterales de las nuevas políticas. No obstante algunos índices inicialmente positivos (la desocupación se redujo, la distribución del ingreso se hizo más igualitaria y la deuda externa disminuyó), paulatinamente se generaron desequilibrios extremos en el sistema económico, que se expresaron particularmente en inflación y desabastecimiento. Se multiplicó la movilización social, se agudizó la polarización política y se precipitó entonces la crisis abierta del sistema institucional. Cabe sumar a esto la acción del gobierno estadounidense, que, según ha quedado documentado, se orientó expresamente a "desestabilizar" el régimen de Allende.

La militancia de izquierda a cargo del gobierno estaba empapada de una ideología revolucionaria donde coexistían la dogmática marxista-leninista clásica acerca del Estado y el partido, el "keynesianismo salvaje" en el pensamiento económico, y el espíritu guevarista inspirado en la mitología de la revolución cubana. El hecho de carecer de la mayoría electoral e institucional indispensable para llevar a cabo su proyecto sin romper el Estado de derecho, fue menospreciado. Presa del maximalismo, la UP jamás hizo intentos serios por ampliar su base política de apoyo. Al contrario, para sectores importantes de la izquierda, la materialización de su proyecto pasaría inevitablemente por un enfrentamiento armado, y el problema político fundamental era prepararse para emprenderlo en buenas condiciones.

Allende, en cambio, persiguió hasta el final una estrategia pacífica y constitucional de tránsito al socialismo, y nunca dejó de hacer esfuerzos - con el apoyo del Partido Comunista y de una minoría del Partido Socialista- destinados a construir una mayoría institucional a favor de los cambios propuestos. En este afán, Allende llamó reiteradamente a la participación de las FF.AA. en el gobierno y buscó incluso el concurso de la Iglesia Católica para contener la polarización. Pero todos estos intentos fracasaron, sea porque el país estaba ya hondamente dividido en dos bandos irreconciliables, sea porque la coalición de partidos que formaban la Unidad Popular estaba irremediabilmente dividida en torno a la estrategia que

debía seguir, sea porque el mismo Allende no mostró la decisión necesaria para romper oportunamente con la tendencia a la confrontación, lo que lo habría obligado a importantes concesiones a sus adversarios y le habría costado el quiebre de la UP.

La crisis: el final de un modelo

La intransigencia llevó a un creciente enfrentamiento institucional. El Ejecutivo requería del acuerdo del Congreso para realizar sus políticas, lo que lo llevaba a esquivar al máximo su sanción por la vía de los "resquicios legales". El Congreso, controlado por la oposición de centro y derecha, inmovilizaba sistemáticamente la acción gubernamental. El Poder Judicial, por su parte, entró en una creciente resistencia al Ejecutivo, plegándose a los continuos reclamos de inconstitucionalidad que emanaban del Congreso. El punto culminante se presentó en junio de 1973, cuando la Cámara de Diputados votó un acuerdo de mayoría declarando veladamente la inconstitucionalidad del Gobierno, lo que abriría las puertas a la intervención militar de septiembre de ese año.

La movilización social alcanzó en ese período niveles desorbitantes. Ello se reflejaba en huelgas en todos los sectores de la economía, en tomas de industrias, manifestaciones callejeras, etc. La economía del país entró en una situación de desquiciamiento: la inflación llegó al 350 por ciento durante el primer semestre de 1973; ramas enteras de la industria paraban por falta de insumos; el desabastecimiento de bienes de consumo provocaba un clima de inseguridad colectiva en la población; importantes sectores productivos y de servicios paralizaban por huelgas interminables, lo que afectaba gravemente las condiciones de vida de la gente. La sociedad, ideologizada y sobrepolitizada al extremo, dejó de ver en el Estado un órgano de identidad, reconocimiento y cohesión. Se llegó así al punto en que hasta el orden público dejó de ser asunto estatal, con el surgimiento de grupos de choque (algunos armados) en respaldo a las diferentes fuerzas políticas en contienda.

En el Chile de 1973, la sociedad entera se veía presa de un sordo cansancio. Desde el punto de vista político la situación parecía sin salida, con cada fuerza encastillada en su posición y con las instituciones bloqueadas, impotentes para organizar siquiera una convivencia pacífica. Así, mucha gente comenzó a inclinarse por aceptar salidas extraconstitucionales. Algunos se dirigían al presidente Allende, para que fijara un camino que rompiera con la ambigüedad de la UP; otros llamaban a la constitución de un poder insurreccional con el fin de "avanzar sin transar"; otros, en fin, se dirigían directamente a las FF.AA., pidiéndoles que intervinieran como último recurso del Estado.

La crisis de 1973, en suma, no fue simplemente el colapso de la UP. Fue mucho más que eso: fue la crisis final de un modelo que por largo tiempo intentó congeniar la integración social, la industrialización y el régimen democrático, sobre la base de una fuerte intervención del Estado. Cabe decir que este modelo no fue en absoluto un ensayo original de Chile. De hecho, fue el proyecto que guió a la mayoría de los países al finalizar la segunda posguerra, dando nacimiento al capitalismo democrático moderno, y que condujo a la producción y el consumo masivos de bienes y servicios, a la extensión de la relación salarial en todos los sectores y tipos de actividad, a la fijación del salario mediante contratos colectivos de larga duración, y a

la importancia creciente del Estado para asegurar el crecimiento, la estabilidad económica, el empleo y la seguridad social.

La modernización autoritaria

Sin entender sus orígenes, no es posible entender el significado revolucionario del golpe de 1973 ni las consecuencias del régimen autoritario chileno, que se prolongó por 17 años. Muchos identifican el autoritarismo con un movimiento puramente regresivo, de involución, en tanto revirtió las dimensiones claves del modelo modernizador del Chile pre-73. Una dictadura autoritaria -se agrega- simplemente no puede ser calificada de modernizadora, por cuanto la modernidad se identificaría necesariamente con los valores de la diversidad, tolerancia y democracia. En rigor, sin embargo, la historia está plagada de casos de modernización a través de regímenes políticos autoritarios. Como lo señala Alain Touraine, la modernización no es nunca un proceso puramente endógeno, pues las sociedades tienden naturalmente a resistir el cambio. En el caso de Chile, el autoritarismo actuó a través del Estado no para reproducir o restaurar el orden precedente, sino para impulsar persistentemente y contra cualquier resistencia un programa de cambios radicales que condujeron a la creación de un nuevo orden en lo económico, social e institucional. En este sentido, el régimen de Pinochet se alejó por completo de la llamada "tradición latinoamericana", donde los procesos de modernización terminan generalmente subsumidos en el orden ancestral.

No cabe duda de que bajo el autoritarismo -en particular después de la crisis 1983-85-, Chile experimentó una dinámica de cambio que, aunque muy diferente a la que se venía desarrollando antes de 1973, corresponde muy de cerca a las tendencias que ha adquirido la modernización a escala internacional: reducción del rol del Estado; liberalización del mercado de trabajo; flexibilización, especialización e internacionalización de las estructuras productivas; privatización de las empresas y servicios públicos; asistencia estatal de tipo minimalista y discrecional, en oposición al universalismo del Estado de bienestar; industrialización y privatización del sistema de medios de comunicación; reducción en todos los ámbitos de la influencia de la política y el Estado; etc.

Como resultado de esto se ha incentivado un fuerte proceso de individuación y de diversificación de los estilos de vida, se han introducido pautas más internacionales de vida y consumo, se ha acentuado la brecha entre la vida privada y la esfera pública, se ha inducido a una menor politización de las organizaciones sociales y a una menor corporatización de los partidos políticos, se ha favorecido una cultura más pragmática y secular, en fin, se ha reducido la dependencia de la sociedad frente al Estado. A esto se agrega que el régimen autoritario prácticamente creó una clase empresarial moderna, que tuvo que emanciparse de la protección del Estado y aprender a competir en mercados abiertos, la que hoy detenta una posición predominante en la vida económica del país y ejerce una influencia mayúscula en los campos social, político y cultural. Todos los rasgos descritos son precisamente aquellos que la sociología ha identificado clásicamente con la modernidad.

Para ponerlo en otros términos, el autoritarismo corresponde a la forma que tomó en Chile la transición entre un orden económico, social y político que estalló en una profunda crisis histórica en los inicios de los años setenta, y

uno nuevo que corresponde a las características que las sociedades capitalistas están adoptando en la mayor parte del mundo contemporáneo. Fue el éxito de este proceso y no su fracaso-el que determinó a la larga la superación del régimen político autoritario en 1990, por su incongruencia cada vez más insostenible con las tendencias liberalizadoras en lo económico, social y cultural.

La sobrevivencia de la izquierda

La experiencia autoritaria realineó las adhesiones políticas y reconfiguró el sistema de partidos chilenos, al instalar como fisura generativa central el quiebre autoritarismo/democracia. Esto permitió el nacimiento de dos grandes coaliciones -una de centro-izquierda (Concertación) y otra de centro-derecha (Unión por Chile)- que han subsistido por cerca de diez años, lo cual ha facilitado enormemente la transición política a la democracia y la gobernabilidad del país. Hay muchos factores intervinientes en la configuración de este nuevo paisaje político; pero entre ellos ocupa, sin duda, un lugar central el profundo proceso de renovación que experimentó la izquierda chilena durante el período autoritario, mientras en todo el mundo la ideología y el modelo histórico que le daban sentido, el marxismo y el socialismo, se desvanecían en el aire junto con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS.

En estas circunstancias, el sentido común indicaba que la izquierda estaba condenada a desaparecer del paisaje político chileno, como ha desaparecido del escenario en otras latitudes. De hecho, una parte de la izquierda chilena, la comunista, se ha visto drásticamente reducida en adhesión e influencia. Pero otro sector de la izquierda, el socialista, logró regresar el 11 de marzo de 1990 al sitio del que había sido expulsada, como parte de la coalición triunfante con Patricio Aylwin a la cabeza. Y lo hizo aliado al que había sido su principal adversario durante la crisis que precedió la ruptura de 1973: el Partido Demócrata Cristiano. Esta izquierda de corte social-demócrata ha logrado reunir cerca de una cuarta parte de las preferencias en las elecciones que se han realizado desde 1990 a la fecha y sigue en el gobierno a través de la misma coalición, con posibilidades de que uno de sus líderes la encabece en un próximo período.

Una de las raíces más hondas de la transformación de la izquierda chilena es el hecho de que sus militantes fueran las víctimas preferentes de la violación de los derechos humanos en los primeros años del régimen militar. Como resultado de esta experiencia, el tema del respeto a los derechos humanos transformó hondamente la cultura de izquierda, donde se empezó a admitir que éstos son el límite ético de toda acción política. Algo similar ocurrió con la democracia: su pérdida en 1973, con todas las desgracias que ello trajo consigo para el mundo de izquierda, llevó a que se le reconociera valor en sí misma, dejando de lado las tesis clásicas que le asignaban sólo un valor instrumental. La valorización de la democracia y de los derechos humanos por la nueva izquierda responde, pues, a transformaciones culturales profundas que se basan en la experiencia vivida, mucho antes que a influencias teóricas externas o a lo que ocurrió en la segunda mitad de los años ochenta con el llamado "mundo socialista".

"Por la paz de Chile"

Bajo ese lema y con la solemnidad propia de un acto de Estado, en 1990 el gobierno del presidente Aylwin realizó el traslado de los restos de Salvador

Allende desde Viña del Mar al lugar donde hoy descansan, en el Cementerio General de Santiago. En el camino se apostaron cientos de miles de personas que querían rendir un homenaje al expresidente, y en la Catedral el Arzobispo de Santiago efectuó un responso oficial con la presencia de las más altas autoridades del Estado. Este fue uno de los actos de reparación más significativos de la transición; como gesto de reconciliación, sin embargo, el tiempo se ha encargado de mostrar que él no alcanzó plenamente su objetivo. No obstante que los 25 años transcurridos deberían haber enfriado las pasiones y permitido una mejor comprensión del proceso histórico, la figura de Salvador Allende aún es objeto de conflicto y de juicios descalificatorios. De hecho, algunos todavía no renuncian al propósito de borrarlo del recuerdo colectivo, sea mediante el silencio o la satanización.

Salvador Allende fue un hombre fiel a su tiempo, con todo lo que aquel tuvo de utopía y de tragedia. Ese tiempo terminó como efecto de una crisis histórica que se impuso sobre la voluntad de los actores políticos de aquella época con una fuerza que sacudió a la sociedad chilena desde sus raíces, dando lugar a la revolución modernizadora posterior. Allende no fue el causante de la crisis; antes bien, él fue una -y quizás la primera- de sus víctimas. Seguir descargando entonces sobre la memoria de Allende la culpa de esa crisis es un acto de injusticia, de miopía y, sobre todo, de ignorancia.

A un cuarto de siglo del golpe militar de 1973, ya es hora de que a Salvador Allende le sea reconocida por todos su posición en la historia de Chile, de tal modo que ésta sea genuinamente una memoria común. Mientras esto no ocurra, "la paz de Chile" seguirá siendo, lamentablemente, un objetivo inconcluso.

Pte



Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios "Miguel Enríquez", CEME: <http://www.archivo-chile.com>

Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: archivochileceme@yahoo.com

NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores.

© CEME web productions 2005

